



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0090/2017

FECHA: 22 de junio de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0090/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I.ANTECEDENTES

1. Por escrito registrado en el Ayuntamiento de Las Rozas -Madrid- el 14 de junio de 2016, la ahora reclamante formuló, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno - desde ahora, LTAIBG-, la siguiente solicitud de información:

- a) Normativa reguladora y convocatoria de los Premios de Excelencia Educativa.
- b) Criterios de selección y de valoración de los galardones.
- c) Publicación de la normativa, convocatoria y criterios de valoración.
- d) Resultados de valoración de los beneficiarios de los Premios 2016.

Mediante Resolución de 2 de febrero de 2017 del Concejal Delegado de Coordinación del Gobierno del Ayuntamiento de Las Rozas, notificada el posterior 20 de febrero de 2017, se acuerda estimar la solicitud de acceso presentada el 14 de junio de 2016. Su contenido puede sistematizarse como sigue:

- *Los Premios a la Excelencia Educativa forman parte de las actividades del ayuntamiento para promover valores como el esfuerzo, la excelencia*

ctbg@consejodetransparencia.es



el mérito. [...] Gran parte de estas actividades se realizan en colaboración con todos los centros educativos del municipio, sin distinción de titularidad pública o privada, colaboración que es voluntaria y que forma parte sustancial de la actividad, pues los eventos locales tienen entre sus objetivos la máxima participación, el intercambio de experiencias, la convivencia en trono a un acto académico.

- La colaboración se concreta en el caso de los Premios a la Excelencia Educativa en la selección, por parte de cada centro, de los alumnos que considera merecedores de la distinción. Cada centro selecciona a nivel interno a sus tres mejores alumnos en 6º de Primaria y de 4º de la ESO (cursos que se corresponden con el fin de las dos etapas de educación obligatorias), de acuerdo con unas pautas o recomendaciones orientativas que aporta el Ayuntamiento; dichas pautas orientativas se consensuaron en su momento con los propios centros, y se remiten cada año a modo de propuesta a cada Director, en una carta remitida desde la Concejalía de Educación y Cultura donde se abordan otras cuestiones relacionadas con la organización del evento. Las pautas que se recomiendan para realizar la selección de los alumnos son combinar el expediente académico en un 80% (media de los dos últimos cursos de cada etapa con una nota mínima de 8) con, a criterio de los profesores, una actitud sobresaliente de esfuerzo, dedicación e interés por el estudio y el aprendizaje, con un peso del 20%. Y es cada centro el que remite la terna de alumnos al Ayuntamiento, para que puedan ser invitados al acto de los Premios. Es decir, el Ayuntamiento -que por otra parte no conoce a los alumnos- no realiza la selección.
- Los premios extraordinarios que se convocan a nivel autonómico y nacional por las administraciones, que ostentan competencias educativas, se regulan mediante los oportunos expedientes administrativos de Bases y Normativa, establecen como único criterio objetivo el de la nota -sin considerar otras cuestiones como las mencionadas anteriormente- y tienen efectos en el currículo oficial. Sin embargo, los Premios a la Excelencia Educativa de Las Rozas no pretenden duplicar esa convocatoria oficial, ni seleccionar a un número reducido de premiados, sino celebrar un evento institucional donde implicar a toda la comunidad educativa de la localidad en torno a los valores del esfuerzo, el mérito y la excelencia, donde además de los alumnos, haya representación de los claustros -conocedores y orgullosos de los logros de los alumnos- y de las familias.
- En cuanto a los premios, y dependiendo de la disponibilidad presupuestaria o del apoyo de un patrocinador, han variado a lo largo de las ediciones. De los dispositivos móviles -en su momento un regalo innovador- se ha pasado a la entrega en la última edición de una tarjeta regalo por valor de 100 € (1er premio), 80 € (2º premio) y 60 € (3er premio).



Frente a esta Resolución por escrito registrado en esta Institución el 16 de marzo de 2017 la interesada plantea una reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG. En particular, considera lo siguiente:

- El ayuntamiento ha resuelto la solicitud de información ocho meses después de haber sido presentada, indicando unas pautas generales orientativas que se recomendaron para la selección de los alumnos, pero se omiten cuáles fueron los criterios reales de selección de los alumnos que deben obrar en los expedientes del centro o del evento.
 - De acuerdo con la Disposición adicional décima de la Ley General de Subvenciones los premios educativos, culturales y científicos deben ajustarse al contenido de la Ley de Subvenciones, lo que significa que en aras de la transparencia y seguridad jurídica los citados premios deben cumplir con unos requisitos mínimos como puede ser la existencia de unas bases reguladoras públicas para que los premios puedan otorgarse con arreglo a criterios objetivos y reglados que eliminen toda posible arbitrariedad. Por lo tanto el argumento esgrimido por el Ayuntamiento indicando de que se trata de un “evento institucional” no le exime de cumplir la Ley y el procedimiento administrativo.
 - Tampoco se han proporcionado los criterios de valoración, ni las puntuaciones otorgadas, tenidos en cuenta para efectuar la propuesta de resolución de los premios y la propia resolución de adjudicación.
 - Además, por tratarse de un procedimiento en régimen de concurrencia competitiva los resultados deben ser objeto de publicación tal y como señala la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Sin embargo no se han proporcionado los resultados de los premios 2016 tal como se solicitó por primera vez.
2. El 17 de marzo, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo, se dio traslado del expediente de referencia a la Secretaria General del Ayuntamiento de Las Rozas a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, se formularan las alegaciones que se estimasen convenientes, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizarse.

Por escrito del Concejal delegado de Coordinación del Gobierno del Ayuntamiento de referencia registrado en esta Institución el 7 de abril de 2017 se traslada las alegaciones que se estiman por conveniente, pudiendo sistematizarse de la siguiente manera:

- *En la resolución le fue facilitada la documentación solicitada, la cual fue remitida previamente, por la Concejalía de Educación y Cultura, que es quien custodia la información solicitada:*
 - *Objetivo de los Premios: Promover el esfuerzo, la excelencia y el mérito.*



- Descripción de actividades similares realizadas en dicho contexto: certámenes literarios, festivales, certámenes de música, etc., para formación complementaria y estímulo de los alumnos.
- Organización concreta de los premios de Excelencia educativa: mediante colaboración voluntaria de los centros educativos del municipio, tanto públicos como privados.
- Criterios de selección y valoración: Una combinación de criterios objetivos y subjetivos, siendo criterio objetivo el expediente académico, correspondiendo a esta parte una ponderación del 80% de la media de los dos últimos cursos de cada etapa con una nota mínima de ocho) y criterio subjetivo un 20% siendo valorado este último criterio por los profesores de acuerdo con la actitud sobresaliente de esfuerzo, dedicación e interés por el estudio y aprendizaje. Estos criterios son aplicados por los propios centros educativos, limitándose el Ayuntamiento al otorgamiento de los mismos, según la valoración efectuada por los profesores de cada centro.
- Los Premios consisten en una tarjeta regalo valorada en 100 euros para el primer premio, 80 euros para el segundo y 60 euros para el tercero, teniendo, por tanto, un valor meramente simbólico.
- El Ayuntamiento, según los datos remitidos por la Concejalía de Educación y Cultura, ha facilitado la información de la que dispone sobre el asunto solicitado, sin perjuicio de que la reclamante discrepe de la forma en la que el Ayuntamiento gestionó la entrega de los denominados "Premios de Excelencia educativa". Indica la propia recurrente que se "omiten cuáles fueron los criterios reales de selección de los alumnos que deben obrar en los expedientes de los centros o del evento". Sobre este aspecto, cabe señalar que el Ayuntamiento ha facilitado los criterios de selección y que son aplicados por los propios centros educativos, por lo que han de reputarse reales los criterios indicados y no otros.
- En cuanto al cumplimiento de la Ley general de subvenciones es de significar que el valor económico de los premios entregados es meramente simbólico, dada su cantidad, por lo que fueron aplicados los principios eficiencia, economía y eficacia en la actuación de la Administración Pública.
- A modo de conclusión, se informa que el Ayuntamiento facilitó a la recurrente la información solicitada que se encontraba en su poder.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno,



la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.

2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno) suscribieron el pasado 2 de noviembre de 2016 un *Convenio para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno* -BOE, n. 13, de 16 de enero de 2017- en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. Precisadas las reglas sobre competencia orgánica para dictar esta resolución, la primera cuestión en la que debemos centrar nuestra atención se refiere a una cuestión de naturaleza formal. Las reglas generales del procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública se abordan en los artículos 17 a 22 de la LTAIBG, especificándose en el artículo 20.1, en lo que atañe a la resolución de las solicitudes de información, que,

“La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan



solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.”

Mientras que, por su parte, el apartado 4 del mismo artículo dispone lo siguiente:

“Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.”

Del precepto transcrito se infiere, por una parte, que existe una regla procedimental específica aplicable a aquellos casos de considerables solicitudes de información en atención a su volumen o complejidad, que no ha sido aplicada por la administración municipal; y, por otra parte, que el artículo reseñado vincula el comienzo del cómputo del plazo de un mes del que dispone la administración para resolver, mediante resolución expresa o por silencio administrativo, a la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del órgano competente para resolver. En el caso que nos ocupa, según se desprende de los antecedentes que obran en el expediente, tal fecha es el 15 de junio de 2016, de manera que el órgano competente de la administración municipal disponía de un mes -hasta el 15 de julio de 2016- para dictar y notificar la correspondiente resolución. Como puede apreciarse de los antecedentes obrantes en el expediente, el Ayuntamiento ha incumplido sobradamente el plazo de resolución de la solicitud planteada, práctica que, desde este Consejo ha de rechazarse de plano, sobre todo si no se ha justificado de manera alguna por la propia administración.

4. En segundo lugar, debemos detenernos en delimitar el objeto del derecho de acceso a la información. Esto es, qué se entiende por “información pública” a los efectos de la LTAIBG, pues su esclarecimiento permitirá precisar el objeto de la pretensión que se sustancia en este procedimiento especial.

En este sentido, cabe recordar que, según se desprende de su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto *“ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”*.

A estos efectos, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la *“información pública”*, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la *“información pública”* como



“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.

A tenor de los preceptos mencionados cabe concluir afirmando que la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del organismo al que se dirige bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas con el requisito de que se trate de un sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la propia Ley.

Partiendo de esta premisa, y según ha quedado acreditado en los antecedentes de esta resolución, cabe advertir, con relación a las específicas solicitudes planteadas por la ahora reclamante, que la contemplada en la letra a) esto es, “la normativa reguladora y convocatoria de los premios de Excelencia educativa” no se configura como un supuesto de “información pública” a los efectos de la LTAIBG por cuanto se trata de una consulta sobre la normativa aplicable a un determinado supuesto – Reclamación número R/186/2105, de 9 de septiembre- y, en consecuencia en lo que respecta a este aspecto concreto corresponde desestimar la Reclamación planteada.

5. Formulada la anterior precisión sobre el objeto de la reclamación planteada, por lo que respecta a las peticiones de información relacionadas en las letras b), c) y d) de la originaria solicitud de 14 de junio de 2016, cabe advertir que la administración municipal, tanto en la Resolución de 2 de febrero de 2017, ahora recurrida, como en las alegaciones remitidas a esta Institución con ocasión de la tramitación de esta Resolución, ha indicado expresamente que “el Ayuntamiento ha facilitado a la recurrente la información solicitada que se encontraba en su poder”.

Es criterio de este Consejo que las solicitudes de acceso a la información deben referirse a “información” que en la fecha de presentarse la solicitud de acceso está en poder del órgano administrativo de que se trate, no pudiendo englobarse dentro de ese concepto la información futura. Partiendo de esta premisa, y en atención a lo manifestado por la administración municipal, en definitiva, hay que desestimar la Reclamación planteada en tanto y cuanto la administración no tiene la información solicitada y, en consecuencia, no existe objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso a la información pública en los términos de los artículos 12 y 13 de la LTAIBG.

Todo ello, sin perjuicio claro está, que todo parece indicar que no dispone de la reiterada información -vinculada a diferentes preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones- al no haberse aplicado las previsiones establecidas en la propia Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para la convocatoria y concesión de los premios de referencia, circunstancia que tendría que haberse justificado en el correspondiente Informe de Intervención en el correspondiente



expediente administrativo y que queda sujeto a la fiscalización de los órganos de control externo como la Cámara de Cuentas de Madrid o el Tribunal de Cuentas.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **DESESTIMAR** la reclamación presentada, en tanto que, en el momento de presentar la solicitud de acceso a la información no existe el objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso a la información regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Fdo: Esther Arizmendi Gutiérrez